

---

*Aquí, los Hechos se Adelantan a las Teorías*

## **Privatización en las Prisiones**

- ★ Abdicación Inaceptable en el Cereso de Matamoros
- ★ Muestra el Nivel de la Corrupción Penitenciaria
- ★ Debilidad en el Area de "Policía y Buen Gobierno"

**LORENZO MEYER**

Desde el día 17 y hasta el momento de escribir estas líneas, el Centro de Rehabilitación Social (Cereso) de Matamoros se encuentra bajo el control exclusivo de los reclusos, pero en realidad desde hace buen tiempo son ellos —algunos, no todos— los que han tomado en sus manos las riendas de esa institución estatal. Esa situación ha servido para recordarnos que en pocos campos ha avanzado tanto la privatización de la vida cotidiana como en las prisiones, pero desafortunadamente resulta que ese es justamente uno de los pocos campos donde la privatización aún es ilegal.

Desde la perspectiva del interés de la sociedad en su conjunto, el gobierno mexicano con frecuencia tiene trastocados sus valores. Un ejemplo lo constituyen sus políticas hacia el sufragio efectivo y las prisiones. En el campo electoral, donde debería imperar la libertad y el respeto a la voluntad ciudadana, ese gobierno es todo menos débil, pues ahí no deja nada al azar e impone

SIGUE EN LA PAGINA DIECIOCHO

---

sus prioridades sobre las de cualquier otra fuerza, incluso pasando por sobre la legalidad. En contraste, y desde hace mucho, por lo que se refiere a las prisiones y a una buena parte de las acciones de la policía en su conjunto, ese mismo gobierno ha optado por dejar que avance el libre juego de las fuerzas del mercado —un verdadero *laissez faire*—, sin importar que con ello se incurra en la ilegalidad. En ambos casos ese trasfondo de la acción gubernamental le ha costado muy caro a la sociedad y es uno de los principales indicadores del atraso de México en materia de desarrollo político.

Antes de seguir ahondando en el tema y para evitar ser acusado de injusto, conviene tomar nota del hecho de que prácticamente en todos los países, la vida en las prisiones no corresponde a lo que los reglamentos dicen que debería ser, y esto es cierto, aunque en grados muy diferentes, lo mismo en la Unión Soviética que en Estados Unidos, en Gran Bretaña que en China. Pero el hecho de que ese mal sea de muchos, no debe ser aceptado como un consuelo o excusa para no actuar, sobre todo si se considera que en México la distancia que media entre lo que debería ser la policía y todo el sistema de prisiones y rehabilitación y lo que realmente son, tiene las dimensiones de un inmenso golfo. Los grados a que se ha dejado llegar la corrupción y la falta de control en el aparato policiaco del gobierno hace a nuestros policías y a nuestro sistema penitenciario, candidatos a una mención en el Guinness Book of Records.

El neoliberalismo hoy dominante está empeñado en quitar al Estado muchas de las responsabilidades que adquirió a lo largo de la primera mitad del siglo XX, cuando lo mismo el socialismo que el New Deal —para sólo mencionar dos momentos cumbres del estatismo— lo hicieron responsable de la producción y administración de una amplia gama de bienes y servicios. Ese afán de privatizar casi todo, ha llegado tan lejos que en Estados Unidos algunos gobiernos locales han considerado seriamente la posibilidad de abdicar de su responsabilidad de controlar directamente las prisiones y en cambio otorgarles a la empresa privada, para que racionalice su administración y las ponga a producir.

Sin embargo, y hasta el momento, la privatización de las cárceles es sólo una idea que ni en Estados

nuestro país, los hechos se han adelantado a las teorías y que, en la práctica, ya existe, y desde hace buen tiempo la privatización de las prisiones. El caso de Matamoros simplemente es uno en donde el proceso ha avanzado más rápidamente y llegado más lejos. Pero si dentro y fuera del país, el actual gobierno ha ganado muchos aplausos por su entrega sin reservas a la causa de la privatización, probablemente en el renglón de policías y prisiones se ha excedido, y por mucho.

La información que nos ha dado la prensa sobre el Cereso de Matamoros desde hace dos semanas, bien podría ser tomada como una historia fantástica, producto de una imaginación perversa, pero desgraciadamente no se trata de un cuento si no de los extremos a los que ha llevado la corrupción del narcotráfico al sistema penitenciario y policiaco mexicano, ya de por sí echado a perder por un régimen —el postrevolucionario— que mostró una indiferencia tan inexplicable como criminal frente a una de las obligaciones básicas de todo Estado moderno: la de proveer la protección mínima necesaria para que la vida colectiva no sea reducida por la ley de la selva sino por las normas de una sociedad civilizada.

La historia increíble del mal llamado Centro de Rehabilitación Social de Matamoros, se centra en la persona de Oliverio Chávez Araujo —antiguo mecánico de aviación, originario de Coahuila de Catalán— y a quien se conoce como "el zar de la cocaína". A estas alturas ya todos sabemos que Chávez Araujo dirige desde el interior del Cereso una poderosa banda de narcotraficantes conectados con el cártel colombiano exportador de cocaína de Medellín. A partir de la matanza de 19 internos que tuvo lugar el 17 de mayo en el Cereso tamaulipeco, nos enteramos con sorpresa, aunque no mucha —nuestra capacidad de sorpresa en materia de corrupción policiaca ha disminuido sustantivamente—, de cosas tales como que dentro de la prisión Chávez Araujo cuenta con una guardia de corps de 70 hombres que disponen de armas automáticas de mejor calidad —AK-47 y R-15— que las que portan los supuestos 18 custodios del penal; que desde la prisión "el zar" organiza la introducción a Estados Unidos de cargamentos de cocaína colombiana que pueden superar la media tonelada, como el

léfónos celulares e incluso para mantener comunicación constante con el exterior; que la celda de "el zar" es tan amplia que en ella cabrían veinte personas; que en una casa de cambio de Matamoros donde Chávez invierte y "lava" su dinero, la policía decomisó en noviembre del año pasado 750 millones de pesos; que Chávez les permite a las autoridades del penal ahorrar un par de miles de millones de pesos al año porque él asumió la responsabilidad de alimentar a los aproximadamente 1,500 reclusos del penal (que debía albergar únicamente a 250), y que también fue el quien costó la reconstrucción de todo el sistema sanitario de la prisión así como del sistema eléctrico; que el joven y emprendedor guerrerense dispone de su propio órgano semanal de información llamado Tribuna, de 16 páginas e impreso en Texas; que las sentencias de muerte por él dictadas —producto de su guerra con otra banda de narcotraficantes dirigida por Juan García Abrego— se cumplen con tanta prontitud como brutalidad, etcétera.

A raíz de la matanza del Cereso de Matamoros, la prensa nos volvió a recordar algo que es un secreto a voces: que en ese, como en muchos otros reclusorios del país (probablemente en todos), las leyes del mercado funcionan de manera implacable, tal como lo dice el Credo neoliberal. En una situación donde el salario promedio de un custodio es de 400 mil pesos al mes y el de un policía 900 mil, los internos deben pagar 250 mil pesos a la semana para evitar que se les obligue a hacer talacha, y si no se desea visitar el apando, deben desembolsar un millón de pesos. Para los que tienen capacidad de consumo, el penal de Matamoros cuenta con 60 celdas de lujo que ocupan más de 25% del espacio disponible; esas habitaciones tienen aire acondicionado, refrigerador, televisión y cocineta eléctrica. Para el que no puede pagar, no queda más que el hacinamiento de costumbre.

La teoría en la que se encuentra montado el neoliberalismo mexicano sostiene que el Estado moderno no debe ser obeso sino fuerte. Sin embargo, la realidad de Matamoros nos está diciendo que en el área de "policía y buen gobierno" —para usar una expresión clásica— el Estado neoliberal mexicano es muchas cosas menos fuerte. Términos como débil, inepto, corrupto o premoderno son, desgraciadamente, los adjetivos que más se ajustan a sus circunstancias actuales.

de muchos, no que se aceptado como un consuelo o excusa para no actuar, sobre todo si se considera que en México la distancia que media entre lo que debería ser la policía y todo el sistema de prisiones y rehabilitación y lo que realmente son, tiene las dimensiones de un inmenso golfo. Los grados a que se ha dejado llegar la corrupción y la falta de control en el aparato policiaco del gobierno hace a nuestros policías y a nuestro sistema penitenciario, candidatos a una mención en el Guinness Book of Records.

El neoliberalismo hoy dominante está empeñado en quitar al Estado muchas de las responsabilidades que adquirió a lo largo de la primera mitad del siglo XX, cuando lo mismo el socialismo que el New Deal —para sólo mencionar dos momentos cumbres del estatismo— lo hicieron responsable de la producción y administración de una amplia gama de bienes y servicios. Ese afán de privatizar casi todo, ha llegado tan lejos que en Estados Unidos algunos gobiernos locales han considerado seriamente la posibilidad de abdicar de su responsabilidad de controlar directamente las prisiones y las pongas a producir.

Sin embargo, y hasta el momento, la privatización de las cárceles es sólo una idea que ni en Estados Unidos ni en ningún otro lado se ha aceptado formalmente. Todo indica que en

del Estado moderno: la de proveer la protección mínima necesaria para que la vida colectiva no sea reducida por la ley de la selva sino por las normas de una sociedad civilizada.

La historia increíble del mal llamado Centro de Rehabilitación Social de Matamoros, se centra en la persona de Oliverio Chávez Araujo —antiguo mecánico de aviación, originario de Coahuila de Catalán— y a quien se conoce como “el zar de la cocaína”. A estas alturas ya todos sabemos que Chávez Araujo dirige desde el interior del Cereso una poderosa banda de narcotraficantes conectados con el cártel colombiano exportador de cocaína de Medellín. A partir de la matanza de 19 internos que tuvo lugar el 17 de mayo en el Cereso tamaulipeco, nos enteramos con sorpresa, aunque no mucha —nuestra capacidad de sorpresa en materia de corrupción policiaca ha disminuido sustantivamente—, de cosas tales como que dentro de la prisión Chávez Araujo cuenta con una guardia de corps de 70 hombres que disponen de armas automáticas de mejor calidad —AK-47 y R-15— que las que portan los supuestos 18 custodios del penal; que desde la prisión “el zar” organiza la introducción a Estados Unidos de cargamentos de cocaína colombiana que pueden superar la media tonelada, como el que se le confiscó en Guerrero el 25 de abril pasado; que Chávez dispone de te-

tera.

A raíz de la matanza del Cereso de Matamoros, la prensa nos volvió a recordar algo que es un secreto a voces: que en ese, como en muchos otros reclusorios del país (probablemente en todos), las leyes del mercado funcionan de manera implacable, tal como lo dice el Credo neoliberal. En una situación donde el salario promedio de un custodio es de 400 mil pesos al mes y el de un policía 900 mil, los internos deben pagar 250 mil pesos a la semana para evitar que se les obligue a hacer talacha, y si no se desea visitar el apando, deben desembolsar un millón de pesos. Para los que tienen capacidad de consumo, el penal de Matamoros cuenta con 60 celdas de lujo que ocupan más de 25% del espacio disponible; esas habitaciones tienen aire acondicionado, refrigerador, televisión y cocineta eléctrica. Para el que no puede pagar, no queda más que el hacinamiento de costumbre.

La teoría en la que se encuentra montado el neoliberalismo mexicano sostiene que el Estado moderno no debe ser obeso sino fuerte. Sin embargo, la realidad de Matamoros nos está diciendo que en el área de “policía y buen gobierno” —para usar una expresión clásica— el Estado neoliberal mexicano es muchas cosas menos fuerte. Términos como débil, inepto, corrupto o premoderno son, desgraciadamente, los adjetivos que más se ajustan a sus circunstancias actuales.

En la campaña electoral que precedió a las elecciones presidenciales de 1988, el candidato del partido en el poder prometió dar respuesta a una vieja y siempre presente demanda de la sociedad mexicana: su derecho a contar con instituciones policiacas y judiciales que efectivamente fueran una garantía de la seguridad pública. Como bien lo muestra el caso de Matamoros, y muchos otros, esa promesa electoral sigue sin cumplirse.

Véase desde el punto que se le vea, la privatización de facto del sistema carcelario —y policiaco— mexicano es la abdicación de una responsabilidad estatal básica. Esa abdicación es inaceptable. El gobierno debe recuperar el control no sólo de esa triste parcela de la realidad social que son sus prisiones, sino de la policía en su conjunto. Mientras esto no ocurra, y por más cambios que haya en el sistema económico, la modernidad real no existirá en México, pues sin un verdadero Estado de derecho México seguirá sumido en el Tercer Mundo pese a ser socio privilegiado de Estados Unidos y Canadá.